

Poblaciones migradas al norte de México: condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez, 2013-2016

Luis Alfonso Herrera Robles, Carlos González Herrera y Arturo Herrera Robles

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez

Introducción

Esta investigación, y sus resultados fueron posibles gracias al apoyo económico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), misma que se realizó a través de la colaboración de El Colegio de Chihuahua. En su momento, se contó la valiosa participación de egresados de distintas carreras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua como Sarai García Espinoza, Francisco Reyes Vázquez, Jesús Gutiérrez Amparán, Ivón Serna y Erick Alaniz, además del apoyo incondicional de Jesús Vargas, activista social y hoy titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua (COEPI).

Durante el siglo xx, particularmente a partir de la segunda mitad de éste, una población indígena creciente ha venido dejando sus comunidades y regiones de origen para trasladarse a zonas urbanas, buscando paliar las condiciones de pobreza extrema y aquellas derivadas de realidades políticas dominadas por el caciquismo, el despojo y la violencia. La mirada sobre la migración indígena a centros urbanos se ha concentrado en unas cuantas grandes ciudades. Como resultado, la información y los estudios especializados han estado ausentes de los estudios urbanos de ciudades como la fronteriza Juárez. Nos obstante, conforme estos grandes centros de atracción de migrantes se fueron saturando y ofreciendo menores oportunidades de mejorar las condiciones de vida, las rutas migratorias de los pueblos indígenas de México fueron ampliándose. El norte del país ofreció una alternativa doble para los planes de migración que se realizan

en las comunidades indígenas. O bien, para buscar ir a trabajar en la cosecha de cultivos altamente comerciales, para acceder a la industria maquiladora o para cruzar la frontera y buscar insertarse en los mercados laborales de los Estados Unidos.

En este segundo escenario se encuentra Ciudad Juárez. El centro poblacional más grande del estado de Chihuahua y que durante la segunda mitad del siglo xx experimentó un incesante crecimiento demográfico, tanto por condiciones internacionales como por decisiones locales: desde la crisis económica de los años 30 en los Estados Unidos que terminó por expulsar, hacia México, a cientos de miles de trabajadores migratorios no documentados, hasta la implantación del modelo maquilador que desde los años de 1960 y ya hasta bien entrados los de 1990, requirió de incorporación masiva de mano de obra local y foránea.

De acuerdo al Censo General de Población 2010, la población asentada en Ciudad Juárez y que se considera como parte de alguno de los pueblos indígenas de México es de 15,580 personas, destacando la pertenencia a grupos como los rarámuri, mazahua y mixteco. Los resultados de esta investigación revelarán un panorama de presencia, riqueza y diversidad étnica mucho mayor al imaginado inicialmente. La utilidad de una investigación como la promovida por la CDI tiene varios niveles de utilidad práctica. Empecemos por el hecho de la necesidad de dejar de pensar en la frontera con los Estados Unidos como parte de un contexto homogéneo en material cultural y, particularmente, en lo referido a la convivencia de grupos étnicos. Para el análisis que sustente la

Poblaciones migradas al norte de México:
condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez, 2013-2016

elaboración de políticas públicas conviene diferenciar a la región de Ciudad Juárez de otras zonas fronterizas. Tanto en el caso de las áreas fronterizas de Baja California y Coahuila, a la población indígena migrante de otras regiones del país se debe considerar a aquellos que aún representan a grupo nativos. En Baja California la población indígena migrante predominante es la mixteca, con una población cercana a los 19 mil personas, sin embargo es aún reconocible la pequeña comunidad yumana con aproximadamente 700 personas. Igualmente en Coahuila, la población indígena migrante de poco más de 2 mil personas, sobrepasa con mucho a la comunidad kikapoo, que apenas alcanza las 340 personas (Garduño: 2004). En el caso de Ciudad Juárez, salvo que consideráramos a los rarámuri como grupo étnico nativo por el hecho, superficial desde el punto de vista cultural y de identidad étnica, de que la ciudad forme parte del estado de Chihuahua, tenemos el caso de una población indígena predominantemente foránea, desde el punto de vista de su lugar de origen. Creemos que este es el caso de acuerdo a opiniones tan bien fundamentadas como las del antropólogo Juan Luis Sariego.

La migración indígena a Ciudad Juárez dentro del ciclo de agudización de la pobreza urbana y precarización de la vida urbana

Organismos internacionales, gobiernos nacionales e instituciones académicas han constatado que la pobreza y la precarización de la vida de sectores mayoritarios de las poblaciones de varias regiones del mundo, lejos de atenuarse durante las últimas décadas del siglo xx, se agudizaron y parecen renovar su potencial destructor al transcurrir la primera década del siglo xxi: los problemas sociales relacionados con la desigualdad social derivan en nuevos rostros de la pobreza y generación de ambientes de gran violencia.

“Lo que se advierte actualmente es un marcado incremento de la pobreza urbana exacerbada por la creciente desigualdad social; es decir, se han ampliado las distancias sociales entre unas mayorías que deben aceptar niveles de vida mínimos, y los pequeños grupos de clase alta que viven en la opulencia. Esto se expresa claramente en la forma de ocupación del territorio, que

ha llevado a caracterizar las ciudades actuales como divididas, fragmentadas o segmentadas, y que da origen a intensos procesos de segregación urbana” (Ziccardi, 2008).

Desde las condiciones actuales del sistema-mundo en términos de distribución de la riqueza, acaparamiento y explotación de los recursos naturales y capital humano, la urbanización de la pobreza ha sido posibilitada por la existencia de un mundo urbano que ha desplazado por primera vez al campo, como el espacio donde habitan los seres humanos. No obstante que la pobreza es palpable en cualquier ciudad del orbe, en las regiones del mundo en desarrollo la pobreza urbana es mucho más profunda y extendida. Mientras que en los países ricos, una sexta parte de las familias urbanas viven en pobreza, en las ciudades de nuestros países ese segmento alcanza al menos a la mitad de la población. Y, como se observará, a prácticamente la totalidad de la población indígena residente en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, no obstante la notable presencia de la IME (Industria Maquiladora de Exportación) como generadora masiva de empleo, el resultado ha sido una economía de resguardo para cientos de miles de habitantes y sus familias que con el paso de los años vieron precarizarse sus vidas. Mientras que los esfuerzos por abatir la pobreza extrema durante la última década ha mostrado cierto éxito para el poniente de la ciudad, para el sur-poniente se ha duplicado y deprime la calidad de vida de unas 40 mil personas, pues los déficit de servicio de agua potable, drenaje y pavimentación son notables y se traduce, en los hechos, en condiciones de vida para ciudadanos de primera y de segunda.

La población indígena residente en Ciudad Juárez vive en polígonos de pobreza de este sector y forma parte de la población más pobre y con menores derechos a la ciudad por sus condiciones de acceso efectivo a los servicios de agua, drenaje, transporte, áreas verdes, salud, educación, comunicación con la autoridad. El arranque del siglo xxi ha sido particularmente traumático para esta ciudad, a la contracción económica experimentada en los Estados Unidos desde el 2001, se han sumado la incapacidad de la autoridad local para proporcionar servicios públicos suficientes y de calidad, una limitada presencia del Estado mexicano para proporcionar servi-

cios de buena calidad en materia educativa, de salud y de vigilancia fronteriza y, por si eso fuera poco, la variable de la crisis de inseguridad y violencia creciente que se dejó sentir a partir del año 2007. Economía y presencia del Estado débiles y violencia generalizada, vulneraron los ya frágiles mecanismos de sobrevivencia de miles de familias fronterizas, incluidas las de origen indígena. El punto de partida de nuestro diagnóstico señalaba que la población indígena con tiempo de residir en Juárez, así como la de más reciente llegada a la ciudad habían entrado a partir del año 2000 en un proceso agudo de precarización de sus condiciones de vida y que la competencia con sectores pobres no-indígenas de la población por los recursos de sobrevivencia, tales como el trabajo, los subsidios gubernamentales, la filantropía y beneficencia, podría estarse agravando.

El panorama de la primera década del siglo xxi en nuestra ciudad era poco optimista:

1. Crisis del empleo maquilador: pérdida de más de 70 mil puestos de trabajo en la IME y 20 por ciento de la planta laboral trabaja en condiciones de paro técnico con tres o cuatro jornadas laborales pagadas por semana.
2. Disminución de los beneficios agregados al trabajo maquilador: supresión de bonos, de servicio de alimentos y transporte.
3. Numerosos establecimientos comerciales cerrados por la crisis económica y por el asedio por pago de “derecho de piso”.
4. Abatimiento del consumo, crecimiento moderado de la economía informal.
5. Incremento de la pobreza y aparición de la pobreza alimentaria, afectando principalmente a la niñez.
6. Se dictamina como “acabado” el modelo de desarrollo urbano que ha seguido la ciudad.

La novedad del presente diagnóstico

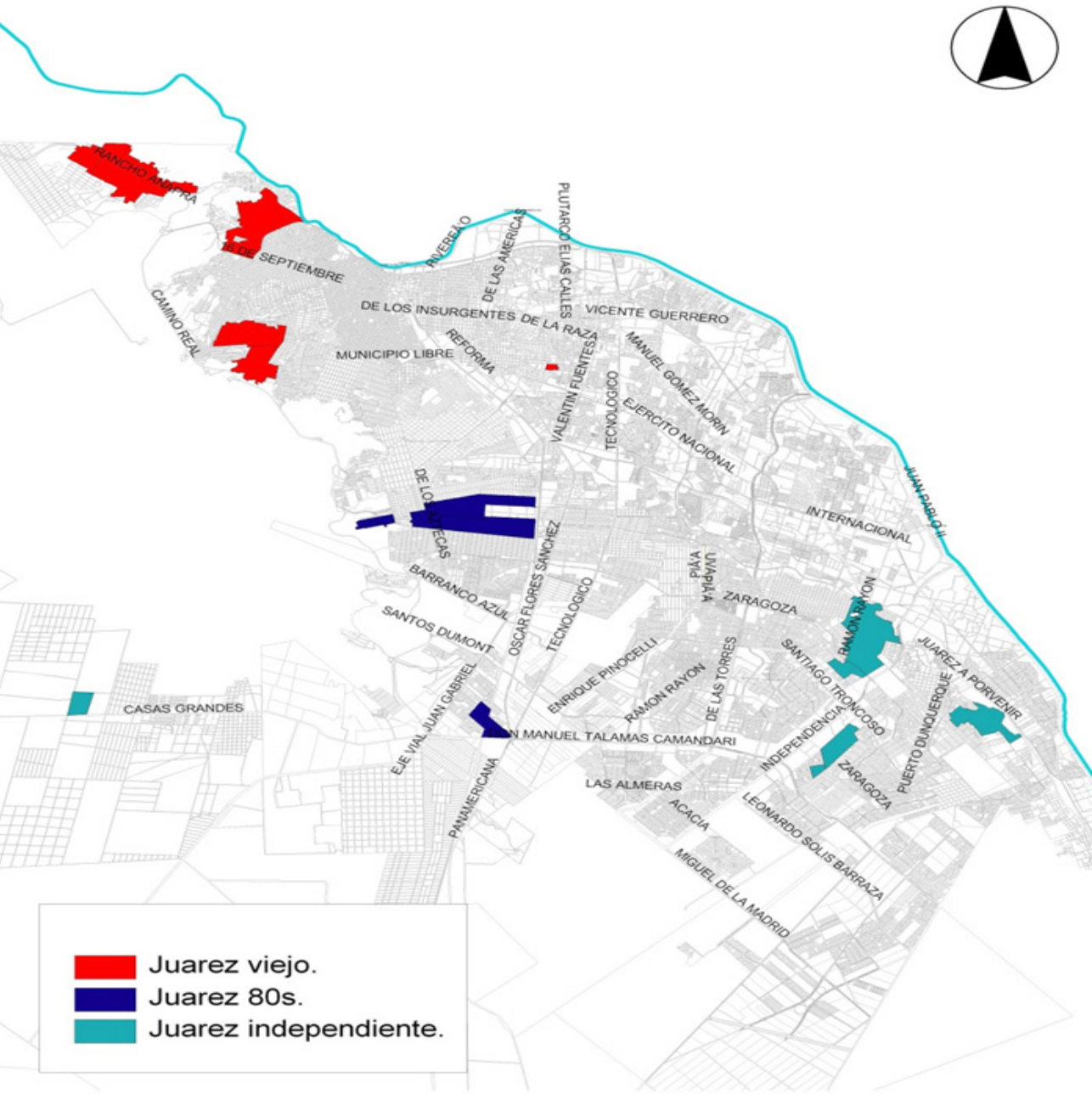
Se ha llegado a comentar que Ciudad Juárez es una ciudad “sobre-diagnosticada”. Si bien es cierto que durante los pasados 15 años se han producido docenas de estudios, monografías, ensayos sobre el origen, el carácter y el destino de la “crisis juarense”, aún las propuestas más ambiciosas por analizar la trama so-

cial citadina, muestran un déficit de atención sobre la situación en la que vive la población indígena residente. La sistematización específica de información sobre las condiciones de vida de este sector de la población, está en una etapa inicial. Ello a pesar que se presenta data quizá de los años setentas del siglo xx. Lo cierto es que hoy que se empieza a insistir en una realidad de precarización urbana y de sectores amplios de habitantes de Juárez atacados por uno o más de los niveles de la pobreza, es indispensable que las políticas públicas tengan una especial atención hacia aquellos que además de las privaciones materiales siguen experimentando diferentes expresiones de prácticas excluyentes o de llana discriminación. Al trabajo pionero de Maya Lorena Pérez, se han sumado otros esfuerzos por darles especificidad a los indígenas que viven en nuestra ciudad y que tienden a perderse en el escenario generalizante de la pobreza urbana.

Este diagnóstico para identificar las condiciones de vida de la población indígena en Ciudad Juárez partió del hecho de que a las condiciones de exclusión material y económica que comparten con el resto de los pobres juarenses (conservadoramente el 50 por ciento de la población total), se suman aquellas derivadas de los prejuicios culturales que en formas de burla, exclusión o racismo abierto sufren cotidianamente. En este estudio, hemos retomado la clasificación de Juárez como un municipio con población indígena dispersa, en la que contamos con registro de población indígena aunque ésta nunca alcanza porcentajes importantes de la población total municipal. Las experiencias de trabajo de campo y gabinete anteriores nos llevaron a proponer la siguiente distribución de las áreas urbanas a considerar en el presente estudio:

1. **Juárez viejo:** En el norponiente con las colonias Anapra, Rancho Anapra, Felipe Ángeles, 16 de septiembre, Chihuahua y Plutarco Elías Calles. Aquí se asentó principalmente el segundo ciclo de migrantes indígenas.
2. **Juárez años de la década de 1980:** En el sur poniente con las colonias Revolución Mexicana, Granjas de Chapultepec, Pánfilo Natera y Kilómetro 20. Aquí se asentó el primer ciclo de migrantes indígenas.

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016



COLONIAS CON ASENTAMIENTOS INDÍGENAS EN CIUDAD JUÁREZ

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación: 2016

3. **Juárez años de la década de 1990 al 2000** (Independencia/independiente): En el suroriente con las colonias Frida Kahlo, Sauzal, Zaragoza, Fray García de San Francisco, Manuel Valdez. Aquí se asentó el último ciclo de migrantes indígenas.

Así, y dentro de estas colonias, se pudieron encontrar a 16 grupos indígenas que viven en la ciudad: mazahuas, raramuris, mixtecos, zapotecos, chinantecos, mixe, otomíes, mazatecos, triquis, mayas, huicholes, tzotzil, zoques, huastecos y chontales.

Trabajo, subsistencia y economía familiar

La población indígena residente en Ciudad Juárez ha diseñado sus estrategias de subsistencia con una combinación de actividades tradicionales y, de manera creciente, con aquellas que corresponden específicamente al medio urbano de esta ciudad. Asimismo podemos señalar otro nivel de actividades que diferencia aquellas que se denominan como “informales”, para el mundo de la economía oficial e institucionalizada, y aquellas que pertenecen al de la “economía formal urbana”. La población indígena residente se encuentra claramente concentrada en las actividades que corresponderían a la clasificación de “informales” y son al mismo tiempo aquellas que están ligadas a actividades, costumbres y saberes de tipo tradicional. Entre el grupo de familias que declararon estar dedicadas a la artesanía (16 por ciento) y aquellas que declaran actividades de comercio no formalizado en parques, calles, plazas de la ciudad (40.1 por ciento) se integra una mayoría de familias que encuentra su sustento económico en actividades como la venta de textiles, cerámica, dulces y alimentos (fritangas), yerbas ligadas a la herbolaria tradicional.

El abanico de las actividades económicas informales presenta a la población indígena residente tanto ventajas como desventajas. Si comenzamos por las últimas deberemos estar de acuerdo que la mayor es la incertidumbre sobre la cantidad de dinero que logrará ingresar a la economía familiar. Lo expresa bien el Sr. Pedro González, comerciante mazahua de la colonia Granjas Chapultepec: No hay forma de saber cuánto se va a ganar, en estas fechas (noviembre-diciembre del 2013) “la ventas están muy bajas y eso nos afecta a todos”, o la también mazahua Silvia García, “uno que es informal no vive a gusto. No sabe si tendrá para comer ese día o no. En ocasiones uno saca 200 pesos pero 150 son para invertirlo...”.

Aunque hemos señalado que en la economía informal se juega el día a día de más de la mitad de las familias indígenas consideradas, los efectos sí logran diferenciarse de colonia a colonia. Mientras que el 31.3 por ciento de las familias indígenas de una colonia como la Granjas Chapultepec están ligadas al comercio informal, puede alcanzar hasta el 75 por ciento en la colonia Plutarco Elías Calles. En añadidura al problema de la incertidumbre ante la ausencia de un ingreso fijo y seguro, las jornadas de trabajo en la economía informal transcurren en espacios abiertos y con altos grados de riesgo: la calle, los cruceros de avenidas con gran aforo vehicular, incluso en espacios como los parques y plazas las posibilidades de ser asaltados o molestados por autoridades municipales son evidentemente mayores que en los espacios de la economía formal.

Señala Vicente Ramírez, también comerciante mazahua de la colonia Municipio Libre “no nos dan chanza de trabajar, ahí andan los policías quitándonos...”. Los espacios de la economía informal suman a los elementos anteriores el ser escenarios al aire libre que pueden terminar afectando a la salud. Considérese, por ejemplo, que durante los meses de noviembre de 2013 a enero de 2014, el 52 por ciento de las familias consideradas en este estudio sufrieron algún tipo de enfermedad respiratoria, situación comprensible al tomar en cuenta el clima de la ciudad. No obstante estas condiciones para el trabajo, la dedicación a las actividades económicas informales continúan significando ciertas ventajas para la población indígena residente en este medio urbano. Comencemos por el aspecto cultural y, particularmente, el mantenimiento de los lazos comunitarios. Muchas de las actividades de comercio de artesanías, comida, hierbas medicinales e incluso la ejecución musical pueden y son de hecho practicadas en grupos familiares. En las observaciones de campo pudimos dar cuenta de cómo comerciantes de diversos grupos étnicos acudían a la explanada del Parque Central de la Ciudad, a realizar sus actividades comerciales acompañados por familiares. De hecho pudimos observar que en este espacio “laboral” se logra prolongar la costumbre de hablar en la lengua nativa, cosa que generalmente sólo se hace en el hogar.

Acudir a trabajar “en grupo” puede también significar disminuir el riesgo de robos de mercancías o asaltos a sus personas. Por contradictorio que parezca, el mantenerse en el mundo de los ingresos procedentes de las actividades informales ha resultado de provecho para algunos de los grupos

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

indígenas. En las visitas a la colonia Municipio Libre, ubicada al suroriente de la ciudad, la comunidad mazahua ha logrado mantenerse por muchos años en el comercio, tanto en el propio mercado de la colonia, que funciona todos los martes, como en otros sectores de la ciudad. Testimonios recogidos muestran que los mazahua no tienen interés marcado en abandonar sus actividades de comercio (artesanía, comida callejera, música, etcétera) sino en que las condiciones para su desarrollo mejoren. Sus conflictos principales son con la policía municipal y expresan preocupación por la amenaza que sienten les traerá las modificaciones fiscales anunciadas por el SAT. Hay evidencia adicional a este estudio que señala una capacidad de movilidad social por parte de la comunidad mazahua de Ciudad Juárez, mostrando un particular aprecio por el estudio y el ingreso de algunos de sus miembros a la educación superior.

Ahora bien, frente al predominio de las actividades informales, el grupo de actividades que señalan una creciente incorporación a la economía formalizada y citadina alcanza cifras importantes. En términos generales se ha encontrado que el 27.5 por ciento de las familias expresan que obtienen su ingreso por ser operadoras y operadores de alguna planta maquiladora, así como para un 12.3 por ciento cuyo ingreso depende del trabajo en la albañilería. Mientras que el trabajo en la maquiladora incluye tanto a hombres como mujeres, el trabajo como albañil es fundamentalmente masculino y, de manera general, tiene características de eventualidad por lo que no coloca, de manera plena, a estas personas totalmente en el mundo de formalidad y algunos de sus beneficios, tales como la incorporación al IMSS y al INFONAVIT

La incorporación al mundo del trabajo formal, principalmente a través de la maquiladora (3 de cada 10 familias), no afecta de manera similar a todos los grupos indígenas. Mientras que entre los mazahua y los rarámuri no ha penetrado con fuerza esa estrategia, en otros grupos el trabajo en maquila forma una parte muy importante del ingreso familiar: entre los zapotecos y mazatecos asentados en la colonia Anapra en 40 por ciento de las familias hay empleados de maquila, seguidos por el grupo mixteco, de la colonia El Papalote, que alcanza a casi el 23 por ciento de las familias.

Existen elementos para análisis posteriores que nos permiten entender la lógica de la “no formalización” de la vida económica de la población indígena residente en Ciudad Juárez.

A los factores socioculturales, a las barreras lingüísticas o incluso a la discriminación simple y llana que se anteponen para el ingreso al empleo, por ejemplo a la maquila, encontramos también señales de cálculos que las familias realizan sobre la conveniencia o la “rentabilidad” de un trabajo formal. Empecemos por el hecho de que los sueldos y beneficios adicionales al sueldo en la maquiladora han venido deprimiéndose de manera constante al menos por la última década, las jornadas de trabajo además de ser intensas se alargan considerablemente si se toman en cuenta los tiempos de los desplazamientos hogar-empleo-hogar. Adicionalmente debe considerarse que la incorporación de algunos miembros jóvenes de la población indígena residente en la ciudad, a la maquiladora las condiciones económicas pudieran no experimentar cambios sustanciales durante años, debido a que en muchos sentidos forman parte de un núcleo poblacional con poco entrenamiento y experiencia en profesiones típicamente urbanas. Ello los anclará a los escalafones más bajos de la estructura salarial y les impedirá la generación de mayores recursos para cambios reales en las condiciones de vida. Más lejos aún queda pensar en la generación de ahorros para compra, legalización o mejora de las viviendas.

Es evidente que el empleo en maquila incluye la incorporación al IMSS y al INFONAVIT pero no significa un aumento en los niveles de ingreso. Simplemente consideremos que según nuestros resultados, el 27 por ciento de las familias tienen a un miembro trabajando en la maquiladora, pero sólo el 14 por ciento de ellas reportan ingresos superiores a los mil pesos semanales. Cabe resaltar que esta situación no afecta de gran manera el nivel de conformidad con el ingreso, o al menos no se expresó en las encuestas, pues prácticamente la mitad, el 46.7 por ciento, dijo sentirse conforme con su ingreso, aunque en los grupos focales sí se expresaron comentarios en torno a las complicaciones para subsistir, de manera especial para hacer frente a las obligaciones emanadas de la educación de los hijos.

Acceso a los servicios de salud y seguridad social

En la encuesta, a la pregunta abierta de si se considera que la familia ha mejorado desde que salieron de sus comunidades de origen y emigraron a Ciudad Juárez, hay un 60 por ciento de respuestas que afirman que el cambio a esta ciudad fronteriza ha sido favorable. Uno de los elementos ligados a esta respuesta lo encontramos en el grado de pe-

netración de los servicios públicos de salud. Para el equipo de investigación resultó una sorpresa que casi el 85 por ciento de la población declarara ser beneficiaria de algún sistema público institucionalizado de salud, con un claro predominio del Seguro Popular (SP) con el 64.5 por ciento de las familias frente a un modesto 20.1 por ciento de familias beneficiadas por el IMSS y un restante 15 por ciento de población que no cuenta con ningún sistema o no contestó. Sin embargo, la afiliación al Seguro Popular en el medio indígena presenta disparidades dramáticas pues, mientras en regiones como los Altos de Chiapas la afiliación al SP alcanza al 74.5 por ciento de las familias indígenas, el índice de afiliación en la Sierra Tarahumara de Chihuahua es de poco más del 21 por ciento, que, junto con los chontales de Tabasco, tenía uno de los registros más bajos a nivel nacional hace sólo unos años. Vale la pena insistir en los datos del SP en referencia a la población rarámuri: mientras que la afiliación de este grupo étnico está entre los más bajos a nivel nacional según el estudio referido, es evidente que la migración a Ciudad Juárez significó un cambio radical en cuanto a la relación entre tarahumaras y dicha institución.

Podemos argüir una forma de transformación cultural profunda vis a vis los sistemas institucionales de salud o quizá, más correctamente estamos ante la ampliación del espectro de lo que se conoce como el *acceso efectivo* a la atención en salud. Estos números son consistentes con los datos que nos ofrecieron nuestros encuestados en relación a sus respuestas ante cuadros de enfermedad: el 71.6 por ciento de las familias acuden al médico al enfrentar un problema de salud y el 16.9 por ciento recurren a la medicina tradicional y a la automedicación. Entendemos por supuesto que estas opciones no son excluyentes. Los problemas de salud que enfrenta la población indígena residente en Juárez incluyen dos ciclos temporales de padecimientos, correspondiéndose con los meses calientes y los meses fríos (del 2014). Nuestro trabajo de campo se realizó a fines del otoño e inicio del invierno por lo que casi el 52 por ciento de las familias informó haber tenido a un enfermo en casa por padecimientos de vías respiratorias.

Particularmente alarmante es la prevalencia de enfermedades crónicas y personas afectadas con alguna discapacidad: mientras que el 18.9 por ciento de las familias declaró que un miembro de su familia padecía una

enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, particularmente grave parece ser la situación de los mazahuas de la colonia Revolución Mexicana en la que el 38.6 por ciento declaró alguna enfermedad crónica), otro 9.5 por ciento nos informó de alguna discapacidad, siendo las tres principales la visual-auditiva, la motriz y la intelectual. Uno de los componentes de un acceso óptimo a los servicios de salud es el de la accesibilidad sociocultural, que expresado en términos muy sencillos señala las barreras que las distancias de género, idioma, etnicidad o religiosidad pueden anteponerse al uso y oferta efectiva de un buen servicio de salud. Por lo anterior, el señalamiento de una pobre comunicación o peor aún, la sensación de ser discriminados por su condición indígena a la hora de llegar a una institución proveedora de servicios de salud es un asunto grave que requiere una modificación cultural en los diferentes niveles hospitalarios de la ciudad. Familias rarámuris encuestadas de las colonias Felipe Ángeles y la colonia Tarahumara nos hicieron mención de haber observado y experimentado abierta discriminación.

A la lejanía cultural del servicio médico se suma la lejanía física: "...nos enfermamos mucho de la gripa en tiempo de frío y en tiempo de calor de deshidratación. Falta un doctor. Si se enferman en la noche qué hacen: ir con el vecino a pedirle ride. Si se enferma uno hay que ir hasta la glorieta" (Grupo focal, Colonia Km. 29).

Acceso a los servicios de educación

Como es por todos conocido, los diferentes modelos de educación indígena que ha experimentado nuestro país han resultado insuficientes si no es que contraproducentes o al menos paradójicos. María Berteley y Severine Durin, entre otras, han señalado que no obstante que como sociedad avanzamos en el reconocimiento de la riqueza cultural que significa la diversidad étnica, cultural y lingüística, terminamos institucionalizando una educación indígena marcada por la precariedad, la segregación y déficits severos de calidad

Adicionalmente, ante la masiva migración indígena de sus comunidades de origen hacia los centros urbanos, nuestro sistema educativo fue incapaz de modificar el subsistema de educación indígena (diferencial, paralelo y compensatorio) para atender a poblaciones indígenas

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

crecientes en el medio urbano. Los indígenas residentes en Ciudad Juárez enfrentan esa realidad de asistir a escuelas urbanas regulares, con el currículo nacional estándar. En esos planteles se enfrentan, por lo menos, a la falta de experiencia y herramientas educativas de los y las docentes frente al grupo que, aun con buena voluntad, tienen muy serias limitaciones para promover una educación en ambientes multiculturales y con diversidad étnica. Así pues, a las deficiencias habituales de los planteles educativos se suman las barreras culturales y lingüísticas que obstaculizan una plena incorporación de la población indígena en el medio urbano.

En el norte de México, sólo el estado de Nuevo León inició, a fines de la década de 1990, esfuerzos consistentes por armar una estrategia educativa dirigida a ofrecer educación básica (primaria) con respeto por la diversidad cultural e intentando integrar profesores bilingües. En Ciudad Juárez la educación intercultural bilingüe es por demás escasa y sólo se ofrece a un lado del asentamiento tarahumara de la colonia Plutarco Elías Calles a través del “Centro de Educación Básica Integral Napawika Nochama” que, a pesar de contar con el apoyo del programa Escuelas de Tiempo Completo, vive un día a día de pobreza y privaciones. Debe mencionarse también el modesto esfuerzo que lleva acabo la gobernadora Socorro Sandoval, en el asentamiento tarahumara conocido como kilómetro 29 o 30 al sur de la ciudad, en la que funciona una pequeña escuela en la caja de un tracto-camión. La inmensa mayoría de los niños que forman parte de la población indígena residente en Juárez asiste a escuelas regulares asentadas en zonas pobres de la ciudad y que están marcadas por la deficiencia de instalaciones adecuadas: sólo el 38 por ciento cuenta con biblioteca, el 7 por ciento con laboratorio y más de la mitad carecen de patio o instalaciones para el recreo y deporte.

La disponibilidad de planteles educativos para las colonias donde se asientan los grupos indígenas es, en términos generales, suficiente para el nivel de primaria; lo es menos cuando de secundaria se trata y mucho menor en el caso de la educación media superior. El promedio general de influencia de una primaria en Juárez es de 430 metros a la redonda, el de secundaria es de 941 metros y el de preparatoria de poco más de un kiló-

metro. Sin embargo, la población más precarizada de la ciudad, incluidos los indígenas residentes, se encuentra en los polígonos urbanos donde uno de los rasgos de la precariedad es que esos promedios se multiplican entre 3 y 5 veces. El presente diagnóstico nos dio acceso, a través de 348 encuestas en hogar, a un universo de 1,352 personas que nos expresan una aproximación muy cercana a la relación entre la población indígena residente y el mundo de la educación que en México es ofrecido como obligatorio, gratuito y universal.

Si bien, los índices de cobertura en los diferentes niveles educativos son superiores a los que se presentan en los municipios indígenas o con presencia indígenas importante, son notoriamente inferiores a aquellos de la población urbana en general. Salvo en el caso del grupo de edad para ser atendido por el nivel de preescolar en los que los índices de nuestro grupo encuestado y el promedio estatal se emparejan en un 61 por ciento de cobertura, el resto de los niveles son marcadamente desfavorables a la población indígena residente en Juárez. La cobertura estatal en el nivel de primaria es del 100 por ciento, mientras que para nuestro grupo encuestado sólo alcanza el 81.7 por ciento. En el caso de la secundaria, el promedio estatal de cobertura es del 91.4 por ciento y para nuestro grupo es del 78.3 por ciento. Durante las entrevistas en los hogares así como durante la realización de los grupos focales, al equipo de investigación le resultó claro que la población indígena residente en Ciudad Juárez le da un valor elevado a la educación. El más grave obstáculo para lograr la permanencia en la escuela y evitar la deserción es el económico y aunque no fue referido directamente, es probable que las formas de exclusión y racismo, que en las escuelas se practica, como reflejo de un comportamiento social más amplio, pueda también ser causa de abandono escolar.

Aun así, es claro ver avances en relación a la educación. Frente al grupo de edad que actualmente debe atender al nivel de primaria y como señalamos alcanza el 81.7 por ciento, de la generación de los padres de estos niños y niñas solo el 26.5 por ciento logró terminar la primaria y un 20.1 por ciento la dejó trunca. Esta misma generación de padres nos reporta que sólo el 18.3 por ciento de ellos terminaron la secundaria y un 8.1 por ciento la tiene incompleta. Los hijos de esta generación tienen según la

estadística oficial un 78.3 por ciento de cobertura. Por otro lado, en la educación superior, el cambio también es radical: frente a una generación de padres en la que sólo entre el 5 y 6 por ciento lograron tener educación superior, el día de hoy la cohorte en edad de estudiar educación superior es del 26.9 por ciento, en buena medida gracias al conocimiento que la familias indígenas han tenido del Programa Nacional de Becas (PRONABES), el Programa Becas a Estudiantes Indígenas de Nivel Superior y los programas específicos de instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Las respuestas de nuestros entrevistados y encuestados no hacen sino confirmar que el traslado a ciudades como Juárez, es resultado de una valoración de auténtica amenaza a la vida, producida por la grave pobreza que se padece en sus comunidades de origen.

“Yo me vine por falta de trabajo, pues allá como trabajo uno en nada. Siempre estar tomando pinole, si uno no produce maíz uno qué come, después se queda uno sin comer y aquí pues uno trabaja, aunque gane poquito pero como quiera es algo y aquí comemos, cenamos y almorzamos. Tenemos las tres comidas” (Socorro. Mujer rarámuri. Grupo focal de la Colonia Plutarco Elías Calles).

Los servicios públicos y su accesibilidad

No obstante el alto grado de precariedad que se puede percatar en el recorrido de las ocho colonias en las que se realizó el trabajo de campo para este diagnóstico, las condiciones generales que Ciudad Juárez ofrece, como la principal población de un municipio catalogado de bajo nivel de marginación, termina por elevar las condiciones generales de vida de los indígenas asentados en la ciudad. A los servicios de educación y salud a que hemos hecho referencia, se suman aquellos que llamamos los servicios públicos urbanos. Como sabemos, la oferta y cobertura de los servicios públicos son uno de los indicadores básicos para que las entidades federativas y los municipios sean clasificados en la escala de la marginación en que vive la población mexicana. Los índices de cobertura de servicios como el agua potable, el drenaje y el surtido de energía eléctrica tienen un nivel lo suficientemente elevado como para que, por ejemplo, al iniciar la etapa de planeación

de la Cruzada contra el Hambre del actual gobierno federal, municipios como Chihuahua y Juárez quedaran fuera de los beneficios de este programa insignia. Hubo de gestionarse una consideración especial para que algunos polígonos de pobreza aguda de ambos, recibiesen el tratamiento de municipios chihuahuense con alto y muy alto nivel de marginación.

En efecto, las cifras oficiales de cobertura de servicios públicos son radicalmente superiores a los que se tienen en las comunidades de origen de esta población indígena residente. Consideremos en primer lugar el agua potable. Tomadas como un todo, las colonias consideradas para la muestra de estudio tienen un 85 por ciento de cobertura del líquido. Siguiendo la pauta notada en otras características y recordando que en todas las colonias los residentes indígenas son minoría, los números varían de manera notable: la colonia Granjas de Chapultepec, cuenta con una cobertura del 96.2 por ciento mientras que en la colonia kilómetro 29 sólo el 25 por ciento de los habitantes cuenta con el servicio. El surtido por pipas que ahí se realiza siempre tendrá el inconveniente de la regularidad y en ocasiones de los precios que deben pagar.

En el norponiente de la ciudad, donde se encuentra la colonia Anapra, el acceso al agua tiene que ver con la calidad ya que aunque la cobertura es superior a la del Kilómetro 29, se enfrenta el problema de no ser agua potable, ofreciendo además un aspecto sucio y amarillento desagradable. La Junta Municipal de Aguas y Saneamiento no ha logrado resolverlo desde que el servicio se introdujo hace más de una década. Los datos del drenaje se nos presenta en las cifras oficiales como de alta cobertura: aproximadamente 8 de cada 10 hogares se encuentran conectados a la red. De nuevo la excepción vuelve a ser las colonias Kilómetro 29 y Anapra. En el primer caso la lejanía ha hecho que la red no exista y se haga uso generalizado de letrinas exteriores a los hogares y en el segundo caso, no obstante que la infraestructura está terminada, el drenaje no es funcional. El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura más pareja en las colonias y alcanza al 85 por ciento de la población según los datos oficiales; es decir, la infraestructura para surtir la electricidad está presente en las colonias, hay presen-

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

cia de alumbrado eléctrico pero el uso dentro de los hogares depende de que exista un contrato con la Comisión Federal de Electricidad.

En la colonia Anapra resultó evidente que la conexión irregular o “colgados” está generalizada. En cuanto al pavimento, salvo la colonia Municipio Libre que presenta un 100 por ciento de sus calles asfaltadas, el promedio ronda el 20 por ciento en las colonias consideradas para este diagnóstico. En todos los casos, los entrevistados reportaron que la organización del transporte público obliga a los habitantes de estas colonias a caminar hacia las vías principales de acceso de cada una de ellas, pues las rutas no cruzan o recorren éstas. Como dato adicional se encontró que sólo en las colonias Municipio Libre y Plutarco Elías Calles hay presencia de postes de la compañía Teléfonos de México (Telmex) o de compañías de televisión satelital. Las condiciones de la vivienda resultan un indicador de gran interés para entender los contextos de la vida diaria de la población indígena residente en Ciudad Juárez. La vivienda, lejos de ser exclusivamente un inmueble, permite ir haciendo visibles las apuestas de vida que la población indígena residente en Ciudad Juárez ha hecho desde su llegada a esta ciudad. Hace unas tres décadas, la migración indígena en la ciudad continuaba estando marcada por ciclos o temporalidades. En su trabajo pionero, Maya Lorena Pérez indicaba que ya se tratara de comerciantes, como los mazahuas, o agricultores, como los tarahumaras, la circularidad que unía a Ciudad Juárez con las comunidades de origen era aún notoria.

Actualmente los datos que tenemos en relación con las viviendas nos permiten intuir, y pensar en la necesidad de más estudios e investigaciones, que quizá esos patrones se han alterado y que la residencia en la ciudad se ha vuelto definitiva y que los regresos a las comunidades de origen han estado cambiando su ritmo. Llama la atención que entre otras características de la vivienda, las encuestas levantadas durante el trabajo de campo nos señalen que el 70 por ciento de las familias vive en casa propia, frente a un 20 por ciento que lo hace en casas prestadas y sólo un 10 por ciento en casas rentadas. El primer dato nos señala una fuerte relación de la vivienda con la estabilidad, el desarrollo del patri-

monio familiar. El segundo sin duda hace referencia a la fuerza de las relaciones de solidaridad y apoyos mutuos existentes entre los miembros de estas comunidades étnicas y finalmente el último dato nos confirma la escasa disposición de dinero que la mayoría de las familias experimenta. La vivienda es una apuesta de vida en la que el trabajo familiar y comunitario puede estarse expresando con claridad.

Consideremos los siguientes datos: el 80 por ciento de las viviendas encuestadas son resultado de la autoconstrucción, contra sólo el 20 por ciento constituido por viviendas consideradas como pies de casa o de interés social construidas por algunos de los programas gubernamentales. La apuesta por una vivienda definitiva y duradera es clara. El 80 por ciento de las viviendas fueron construidas con materiales sólidos, el block de concreto principalmente. Ese mismo porcentaje de viviendas cuenta con pisos de cemento. El 50 por ciento de las viviendas cuentan con techo colado de cemento, frente a un porcentaje similar que utiliza la lámina y la madera.

Otro elemento de significación es que el 70 por ciento de las viviendas, de esta muestra, cuenten con un sanitario interior. El tamaño y distribución de las viviendas tienen mayor variación que los datos anteriores. El 30 por ciento de las familias encuestadas habitan en viviendas con superficies que van desde los 12m² y hasta 50m²; las casas más pequeñas fueron reportadas en los asentamientos tarahumaras. Un 40 por ciento de las familias vive en casas habitación con superficies que varían de entre los 51m² a los 80m². Finalmente un 20 por ciento de las familias que residen en viviendas con más de 81m², entre las que se encuentran las casas de mazahuas con más de una planta construida. Otro tipo de relación se establece cuando consideramos la distribución de las viviendas. Nuestros resultados arrojan que el 50 por ciento de las familias encuestadas habitan en casas con uno y dos cuartos en los que se desarrollan todas las actividades familiares. Si consideramos que el 80 por ciento de las familias de nuestra muestra está integrado por cuatro y hasta ocho miembros, podemos hacernos una idea de las condiciones de hacinamiento que experimenta una proporción muy considerable de la población indígena residente en Ciudad Juárez.

Lazos familiares y étnico-comunitarios. Integración social y reproducción de cultura e identidad

El 80 por ciento de los hogares que forman parte de nuestra muestra están integrados por grupos unifamiliares; el restante 20 por ciento lo componen familias extensas; resalta la colonia Plutarco Elías Calles, donde se encuentra un asentamiento rarámuri importante, que arrojó un 53 por ciento de hogares habitados por familias extendidas. En nuestros recorridos de campo, tanto para el levantamiento de las encuestas en hogares como para la realización de los grupos focales, no encontramos personas viviendo fuera de círculos familiares como los recién mencionados, por lo que se refuerza la idea de que el grupo familiar es la forma más importante de organización para las actividades cotidianas, así como para la defensa de sus integridades física y cultural. La familia es el espacio que permite la subsistencia material y la persistencia cultural. Deberá considerarse para futuras investigaciones qué implicaciones podrá tener, para las poblaciones indígenas residentes en Juárez, el régimen de unión de los padres de familia.

Un porcentaje relativamente bajo respondió afirmativamente cuando se le preguntó si los padres estaban unidos en matrimonio: 46.7 por ciento en el caso de la colonia Anapra, un 50 por ciento para el caso de Granjas de Chapultepec y hasta un 63.8 por ciento para la colonia Municipio Libre. El tipo de economía que practica la población indígena residente en la ciudad hace prácticamente imposible imaginarla funcionando sin el soporte de un grupo familiar. En las familias rarámuri, por ejemplo, la eventualidad del trabajo de los varones en la albañilería es compensada por la venta de hierbas medicinales que las mujeres realizan todo el año. En las familias de grupos étnicos, donde predomina la actividad del comercio, como entre los mazahuas, la familia entera se involucra: la preparación de alimentos podrán hacerla las mujeres, pero su comercialización en la calle la hacen los varones o por ambos cuando se trata de puestos informales en plazas o parques. Nuestros informantes mencionaron en que más que existir un régimen disciplinario estricto y autoritario, lo que hay son un conjunto de reglas convenientes que les permiten mantener unida a la familia.

Hay comportamientos esperados que podrían formar parte del *ethos* de cualquier familia de cualquier ciudad de México, tales como el respeto a los mayores, mantener avi-

sada a la familia cuando no se está en el hogar, así como el respeto, la sinceridad y una buena comunicación en el núcleo familiar. En las familias indígenas se añaden otros rasgos de comportamiento que a la larga son como cemento de la cohesión comunitaria: a) la costumbre de comer juntos que ayuda a evidenciar los enormes esfuerzos que se hacen por conseguir los alimentos y el alto significado de compartirlos; b) el trabajo como una responsabilidad que involucra a casi todos los miembros de la familia, en la que si bien los mayores pueden hacerse cargo de las tareas que producen el dinero, sobre los niños, ancianos o amas de casa recaen faenas domésticas indispensables para la sobrevivencia.

Al interior de un hogar las actividades se juxtaponen, las que aseguran la limpieza del hogar y la ropa y aquellas que aseguran la preparación de las comidas, se complementan con las que producirán dinero para todo aquello que debe adquirirse en una economía monetizada. Sin embargo los dos tipos parecen tener el mismo nivel de valoración: preparar tortillas para la comida del día y tostar semillas o preparar los dulces que se venderán en la calle. En una primera valoración de los lazos familiares y comunitarios se intuye que la separación entre las labores hogareñas y las dedicadas al comercio, por ejemplo, no tienen una relación de mayor o menor jerarquía. Igualmente, la maquinaria familiar impide que cada integrante tome decisiones de manera individual o egoísta. Prácticamente cualquier labor, tarea o comportamiento tiene un significado múltiple y su impacto en la estabilidad de estos grupos es polivalente. Las ceremonias religiosas, más allá de su valor espiritual y religioso, renuevan y refuerzan la organización comunitaria con base étnica: bailar matachines, danzar el Machetero o Las Viejitas, celebrar Día de Muertos, a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, o a los diferentes santos patronos. El esfuerzo que se hace por conservar la identidad enfrenta a un poderoso enemigo: la ciudad con su oferta cultural vertiginosa y en muchos casos desarraigada; la vida urbana “occidentalizada” con múltiples prácticas excluyentes y discriminatorias y estilos de vida que pueden diferir mucho de aquellos de los que depende la cohesión comunitaria y la identidad étnico-cultural. Hoy es una realidad que 4 de cada 10 familias encuestadas nos han señalado que han perdido usos y costumbres como consecuencia de su vida en la ciudad. En 5 de cada 10 familias, sus integrantes han alterado, parcial

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

o radicalmente, su vestimenta, y en 3 de cada 10 familias la lengua materna se ha dejado de hablar.

“Nos miran como burlándose de uno, ya ven que con la mirada uno siente rápido, no dicen india pata rajada, por lo menos que me digan india, en vez de india pata rajada. Sí me da coraje que me digan así ... Cuando hablamos en tarahumara, nos dicen que las estamos ofendiendo y yo les digo que no, que nosotras así hablamos”, Herminia Sandoval Orpinel. “Siento que si nos miran así por la vestimenta este pero la mayoría pregunta por la vestimenta qué significa, entonces cuando pregunta por qué y veces nos pregunta por qué no nos cambiamos la vestimenta si ya vivimos aquí y yo les digo que no porque es difícil cambiar de vestimenta y luego cuando hablamos así te remedan por ejemplo ahorita que veníamos en la ruta yo me sentí así ya un señor grande entonces ya le dije que por qué nos estaba remendando si no entendían por más que le decía al señor pero no entendía el señor, se estaba burlando, y le estaba diciendo a Lolita Morenita, yo ya pensaba en pisarlo si no se callaba. Pero si hay personas que nos preguntan bien si les contestamos bien”, Rosalinda Guadalajara Reyes, gobernadora rarámuri de colonia Kilómetro 29.

Cualquier política pública que se quiera implementar en torno a la protección de las lenguas maternas de las poblaciones indígenas residentes en esta ciudad, deberá considerar que las circunstancias generales están cercando su práctica y funcionalidad al ámbito familiar. El español se vuelve la única lengua de comunicación para el 100 por ciento de las familias en los ambientes de la escuela, los centros de salud, el trabajo y el trato con desconocidos. Para el 90 por ciento de las familias el español también es la lengua que se practica en la iglesia y en las actividades comerciales. Con los vecinos o con los amigos el 70 por ciento habla sólo en español. Dentro del hogar, el bilingüismo está en asenso pues el 60 por ciento por las familias nos confían que se comunican indistintamente en lengua materna y en español.

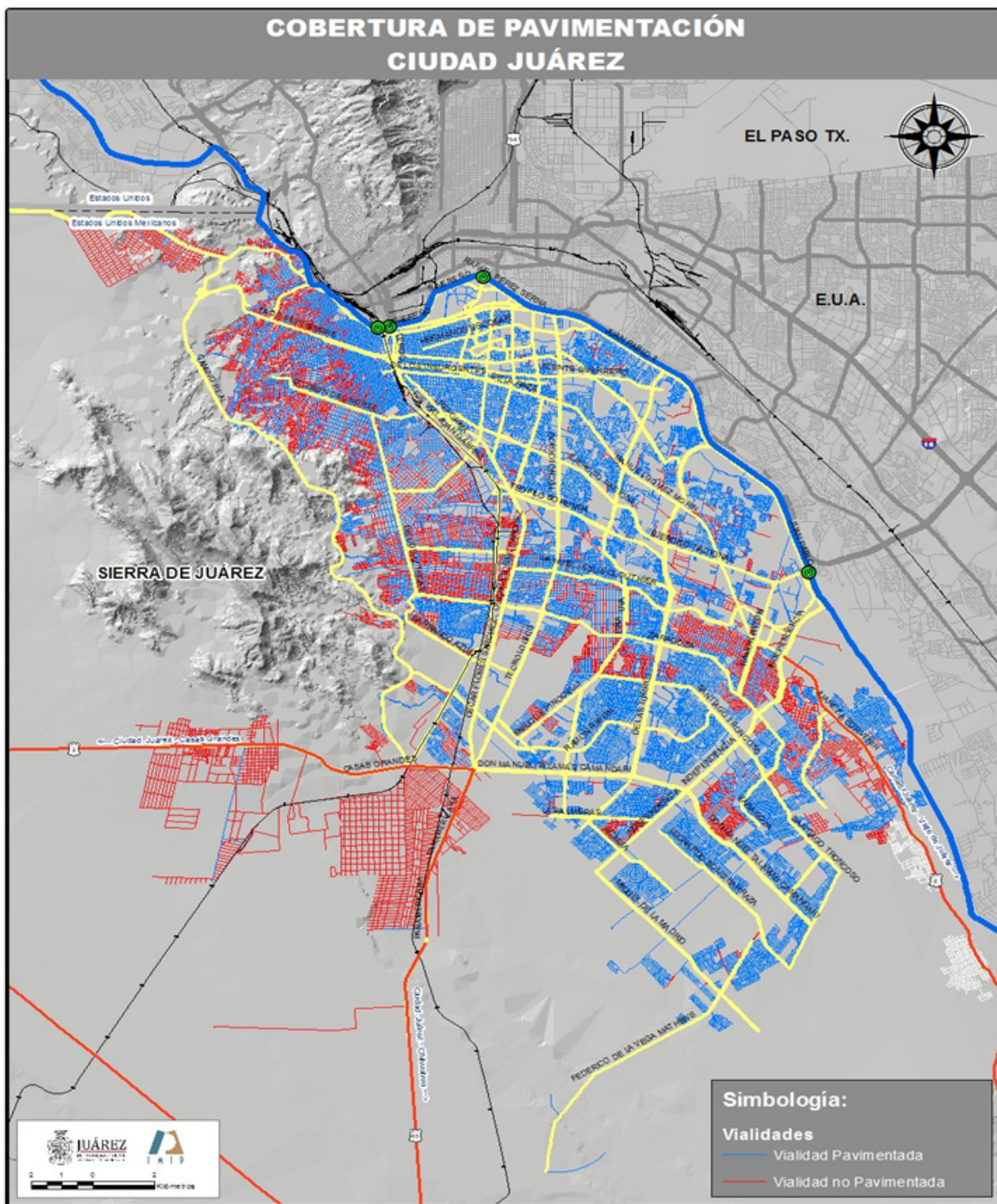
Los mismos informantes nos señalaron que solo el 30 por ciento de las familias usa de manera exclusiva la lengua materna dentro de los hogares y particularmente para la comunicación con los padres y los abuelos. La gran reserva cultural para lograr proteger las lenguas maternas se encuentra en el entorno familiar, donde el 90 por ciento de los

padres son bilingües y una buena proporción de ellos puede leer y escribir en sus lenguas maternas. La relación población indígena residente-centro urbano avanza y se complejiza cada día. Los indígenas experimentan esa relación como un horizonte que más que de capas yuxtapuestas, se aparece como un circo de varias pistas en las que actúan con niveles de identidad cultural de diferente intensidad. Una cosa es cierta, la gente que accedió a darnos información nos expresó con claridad su intención mayoritaria de hacer de Juárez su lugar de residencia permanente. El 60 por ciento de las familias no piensan salir de Juárez y el 30 por ciento piensa residir aquí por algunos años. Resalta el poco interés que hay por cruzar a los Estados Unidos, pues a pregunta expresa sólo el 10 por ciento señaló esa intención. Igualmente sugerente resulta el 10 por ciento que nos señaló que tiene intención de visitar de manera temporal su comunidad de origen y permanece en ella durante un periodo no determinado antes de regresar de nuevo a Juárez.

Ante esta realidad hay que enfocar políticas, de largo aliento y calado, que permitan el mejoramiento permanente de la vida de la población indígena residente en Juárez. Facilitar el fortalecimiento de la participación ciudadana de estos sectores al tiempo que se den los elementos para conservar la identidad étnico-cultural en la intensidad que ellos decidan. Por ejemplo, solo 3 de cada 10 familias señalaron que en su colonia hay algún tipo de liderazgo o representación. Un 40 por ciento señalaron que sí asisten a reuniones de vecinos para lograr solucionar problemas comunes y solamente 2 de cada 10 familias nos contestaron que acuden a alguna autoridad para buscar solución a sus problemas. Mientras que hay una marcada tendencia a confiar en los vecinos, cerca de un 70 por ciento (y a obtener respuestas favorables cuando se acude a ellos, el 80 por ciento), la desconfianza por el mundo exterior a la colonia es muy marcada y preocupante: 60 por ciento de las familias no confían en la gente de la ciudad; el 80 por ciento no tiene confianza en las autoridades estatales o municipales; el 60 por ciento desconfía del Ejército Mexicano. Un interesante contraste es la confianza que alcanza el 60 por ciento hacia el Seguro Popular.

“[...] tenemos muy buenas, incluso nuestras autoridades aunque sean comunitarias yo creo que tienen muchos más valores que cualquier autoridad, que, que...

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016



Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación: 2016

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

están en la ciudad, lamentablemente es una autoridad corrupta, en cuanto nosotros tenemos un sistema puro, yo creo que se tiene que analizar” [...] Constantino (Grupo Focal con Mixtecos).

La desconfianza es un serio obstáculo para, por un lado, avanzar hacia la generalización de la integración social con respeto a la identidad y, por el otro, para potenciar los alcances y resultados de la atención institucional de las diferentes esferas de la administración pública a favor de este sector social desfavorecido. La comunicación con esferas donde se toman decisiones se entorpece por la desconfianza, como recién se señaló, y por la falta de información que éste sector tiene de sus derechos como mexicanos en general y como indígenas en particular. Consideremos, por ejemplo, que de acuerdo a nuestros datos, sólo uno de cada diez jefes de familia conoce de la existencia de leyes expedidas a favor de los pueblos indígenas de México. Esa es la misma proporción de encuestados que nos señaló que sabían que existía alguna dependencia oficial cuya misión es proteger y brindar apoyos a los diferentes pueblos indígenas del país.

“[...] pues, yo creo que hacer un llamado al gobierno, que se enfoque más a las comunidades indígenas, nosotros lo único que nos falta son oportunidades, ya es... no somos ignorantes más bien las condiciones no se nos han dado para que nosotros progresemos, [...] no pedimos tal vez dinero, yo creo mejores oportunidades, que las universidades abran espacios con becas, también, yo creo somos mucha gente que venimos del sur, no tienen, no tienen las condiciones para las... las viviendas son las viviendas de a comparación como se pagan son... de muy mala calidad, yo creo que se tiene que trabajar en ese sentido, la canasta básica es donde nosotros más lo resentimos que mucha gente también, yo lo veo con la gente que viene, que viene de nuestra comunidad, que es donde más batalla, en cuanto al salario... son muy bajos, en las empresas también, yo creo que se les tiene que dar también algún este... algún incentivo para que los pudieran contratar, no porque, no porque tengan un color de piel distinta, la edad también, el tamaño, yo creo que también en eso no se mide la capacidad que nosotros podemos hacer, tenemos muchas cosas que podemos hacer”, Constantino (Grupo focal con mixtecos).

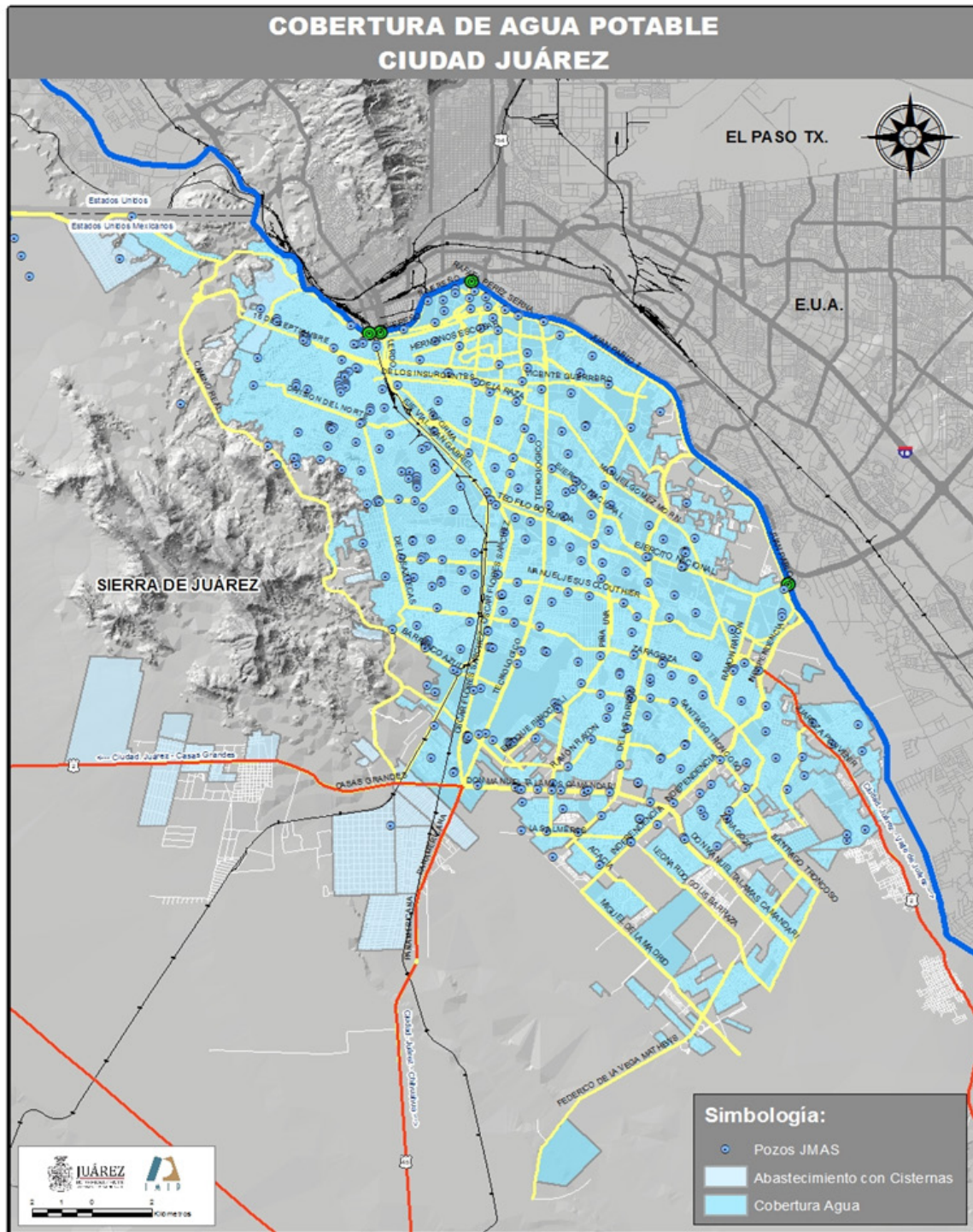
El acceso efectivo a los servicios públicos: las barreras de la pobreza, la desigualdad urbana y la discriminación

La investigación permitió visibilizar los niveles de acceso a los servicios públicos de la ciudad que tienen las colonias donde están asentadas las distintas poblaciones indígenas. En términos generales, todas las colonias de asentamientos indígenas se encuentran en zonas periféricas con marcadas desigualdades urbanas. La llamada “accesibilidad universal” al conjunto completo de servicios y derechos que una ciudad debe proporcionar a sus habitantes está muy lejana para estos habitantes. No se trata sólo del derecho a los servicios urbanos tradicionales como el agua y drenaje, electricidad y transporte que aún se encuentran lejos de ser plenos y efectivos. En el siglo XXI están también los derechos a la centralidad del ciudadano en su ciudad e incluye la movilidad, la conectividad, los derechos culturales.

La situación del pavimento, que como quedó dicho es marginal salvo en la colonia Municipio Libre, tiene implicaciones más allá de las dificultades para transitar en vehículos. La falta de este equipamiento urbano coadyuva en la proliferación de una serie de enfermedades bronco-respiratorias y gastrointestinales, además de alergias por la exposición permanente al polvo, principalmente en los infantes. La falta de pavimentación es desfavorable para la accesibilidad y conectividad de las colonias, la exposición a la tierra dificulta algunas tareas domésticas y cotidianas en una región caracterizada por tolvaneras y fuertes vientos de temporada.

La población indígena residente en la ciudad enfrenta la dificultad de conservar el agua potable en condiciones óptimas para ser usada como parte de la elaboración de los alimentos y la higiene. Por otro lado, en las zonas del norponiente y surponiente de la ciudad, donde la red de agua potable es insuficiente o se entrega líquido de mala calidad, los indígenas deben esperar el abastecimiento por las pipas de agua del Municipio que lo distribuyen no siempre con la regularidad requerida, violando además la política de gratuidad del servicio.

En estas dos zonas, donde el acceso al agua potable es tan limitado, los impactos se suman a los de ausencia de pavimento, dificultando tareas y actividades básicas



Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación: 2016

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

para la población que están relacionadas con la salud, la higiene, la alimentación y la limpieza. La ausencia de este servicio público, evidencia las condiciones precarias de estas poblaciones de indígenas en el extrarradio urbano o en zonas de la periferia de la ciudad. El siguiente mapa evidencia esta geografía de la pobreza en donde los indígenas quedan atrapados sin el servicio de agua potable y dependen de las autoridades estatales para su consumo.

En cuanto al alumbrado público, se encontró que un porcentaje alto cuanta con este servicio, sin embargo, una parte de esta red se encuentra bandalizada, fuera de servicio o con falta de mantenimiento por parte de las autoridades correspondientes. La falta de alumbrado y buena iluminación, dificulta los desplazamientos en horarios nocturnos y genera condiciones de inseguridad a los habitantes de las colonias indígenas. Desde el enfoque de los derechos urbanos, el acceso a la iluminación promueve una mejora en las condiciones efectivas de vida de los pobladores y facilita sus actividades familiares, comerciales, laborales y comunitarias.

Lo que respecta al tema del acceso al transporte público, se encontró que los habitantes de las colonias indígenas, tienen que caminar distancias que van de 1 a 2 kilómetros, para poder llegar a tomar el transporte que los lleve a sus lugares de destino. En el caso de los indígenas rarámuris de la colonia Kilometro 29, la situación de las distancias a caminar se agudiza debido a la deficiencia del servicio de transporte público y de su ubicación geográfica periférica dentro de la ciudad. Sus traslados y desplazamientos urbanos son principalmente con motivos de trabajo, comercio y visita familiar. En lo general, el transporte público de la ciudad es de mala calidad y el servicio deficiente. Sólo se ha modernizado una ruta que recorre de norte a sur y en sentido contrario la ciudad, sin que las colonias indígenas queden dentro de esta modernización del servicio de transporte público.

La mayoría de las actividades comerciales y laborales (formales e informales) se encuentran en otras áreas urbanas, por lo cual el transporte público se convierte en un tema nodal para mejorar las condiciones de vida de los indígenas urbanos. La movilidad entendida como par-

te de los derechos urbanos debe ser focalizada con sentido de inclusión y requiere ser desarrollada como parte de una agenda urbana de desarrollo social integral y compensatorio y que además de la prestación del servicio, la población indígena residente debe ser capaz de utilizar el transporte público sin el temor a ser discriminados por la vestimenta y el uso de la lengua materna. Por otra parte, el trabajo de campo arrojó que los indígenas experimentan una total vulneración al derecho urbano que ha puesto a la conectividad como un derecho de nueva generación. El número de computadoras en casa y la conectividad de los hogares son los indicadores más sobresalientes. La encuesta sobre las condiciones socioeconómicas de las poblaciones indígenas que forma parte de esta investigación es clara al respecto y evidencia la desigualdad urbana en cuanto al derecho a la conectividad: si bien, el 21.5 por ciento de la población encuestada manifestó que sí cuenta con computadora en casa, el problema de la falta de conectividad aparece de manera agudizada cuando se desglosa por grupo étnico la misma pregunta: ¿Tiene computadora en casa?

Como se pudo observar en las tablas de frecuencias generadas por el SPSS, los mazahuas con 27, seguidos de los mixtecos con 15 y los zapotecos con 11 casas que sí cuentan con computadora, suman apenas 53 de los 75 domicilios que contestaron de manera afirmativa a la pregunta, el resto, los 271 domicilios (77.7 por ciento) no cuentan con computadora. Pero lo verdaderamente alarmante es cuando se preguntó: ¿Cuenta con servicio de Internet?, a lo cual solo 41 de los encuestados respondió favorablemente, siendo 305 el número de viviendas de un total de 349 de las encuestadas las que no cuentan con este servicio. La conclusión al respecto es que la población indígena de la ciudad está “desconectada”, sin acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento, marcando una brecha digital que se suma a la brecha social como parte de la desigualdad urbana de estas poblaciones. La alternativa que se pudo identificar como forma de acceso a las Tecnologías de la Información, fue la del uso de los centros de internet, donde deben pagar entre 10 a 25 pesos dependiendo los minutos de renta del servicio de internet en estos establecimientos, casi siempre fuera de las colonias.

En el medio urbano la utilización del gas como combustible es un servicio básico. Aunque Ciudad Juárez cuenta con el servicio de gas natural entubado desde hace más de un siglo, lo cierto es que los habitantes de las zonas periféricas y particularmente aquellos asentados en los polígonos de pobreza deben surtir el gas de manera más convencional a través de tanques de gas butano. También aquí se muestran diferencias, mientras que mazahuas, huicholes, mixtecos y zapotecos utilizan vehículos particulares para surtirse de gas llevando sus tanques a las estaciones de carga, los rarámuri deben esperar a que los camiones de las compañías gaseras recorran sus colonias y cargar sus tanques hasta donde los camiones se estacionan. En un clima como el de Juárez, el gas se vuelve el combustible preferido no sólo para cocinar, sino para el calentamiento del agua y de las habitaciones. Desafortunadamente en invierno, justo cuando el consumo aumenta, el precio del gas tiende a incrementarse de manera importante. Finalmente, la investigación evidenció que si bien es cierto que las poblaciones indígenas cuentan con la mayoría de los servicios básicos dentro de la mancha urbana, un desglose detallado en términos de acceso efectivo a estos servicios públicos, nos dice que existe una brecha social marcada por la desigualdad urbana que dificulta la calidad de vida de los indígenas y se convierte de manera estructural en una barrera para salir de la pobreza urbana o mediar con ella y hacerla menos nociva.

La discriminación está sustentada en el racismo que marca a la cultura mexicana con ese rasgo tan ominoso como antiguo. Se evidencia en una variedad de prácticas de más o menos intensidad y se añade a los otros elementos de la desigualdad urbana, que los pobres y de manera más acentuada los indígenas residentes en Ciudad Juárez padecen. Hay discriminación cuando por razones del origen étnico de una persona el acceso a la educación y a la salud se torna menos eficiente y efectivo. Independientemente de lo que pudiera ser una práctica discriminatoria o vejatoria abierta y consciente, que sin duda debe ser reprobada y sancionada, indirectamente se discrimina cuando no hay protocolos para salvar las barreras lingüísticas y culturales de un alumno o de un paciente.

“[...] los servicios médicos son muy deficientes en las instituciones, como el Seguro Popular, a mi mamá por ejem... por ejemplo la tratan muy mal me he dado cuenta, la he acompañado a veces y pues las tratan como si fueran animales más que a personas yo creo, la dignidad cuando menos que se les debe respetar y no lo están haciendo” Constantino (Grupo focal con mixtecos).

Hay discriminación cuando mexicanos que forman parte de un grupo étnico del país se abochorna o siente la necesidad de dejar de hablar en su lengua materna o dejar de usar su vestimenta tradicional por las miradas desaprobatorias de otras personas.

“Nos ven normal, nada más hay un problema pues cuando hablamos en tarahumara, bueno pues en lo personal para mi yo me siento bien en hablando tarahumara y a mí se hace incómodo hablar español con la gente de la comunidad yo casi no hablo español con la comunidad y cuando voy en el camión yo les hablo en tarahumara”, Lorena Loya Martínez (raramuri).

“Siento que sí nos miran así por la vestimenta este pero la mayoría pregunta por la vestimenta qué significa, entonces cuando pregunta por qué y veces nos pregunta por qué no nos cambiamos la vestimenta si ya vivimos aquí [...]”, Rosalinda Guadalajara Reyes (raramuri).

Hay discriminación cuando las prácticas de contratación en empresas realizan escrutinios de tipo cultural y basado en apariencias, color de piel o incluso estatura rechazan a un solicitante para un puesto de trabajo.

“[...] pues en... pues varía, aparte, pues sí hay veces que me han discriminado, o sea y de hecho por no llenar los requisitos de la estatura o en algo se me ha quedado en empleo, ven en mi perfil la discriminación, o sea en parte, no, no en todo, pero ya en parte pues sí, si hay gente que se ve y deja de ver conforme en los actos, esa persona pues no es así en lo que aparentaba, pero sí, hay mucha discriminación y este y sí”, José Luis (Grupo focal con mixtecos).

La desigualdad urbana es uno de los hallazgos de la investigación como forma de vida urbana entre poblaciones indígenas y no indígenas. La brecha social y digital se amplía por las condiciones de acceso y conectividad, sumadas la falta de movilidad, iluminación y centralidad urbana que precarizan a las poblaciones indígenas y los

Poblaciones migradas al norte de México:
Condiciones de vida de los indígenas en Ciudad Juárez: 2013-2016

excluye socialmente de los beneficios e infraestructura urbana. En fin, el acceso efectivo a los servicios públicos es deficiente y estructuralmente debilitado por la ausencia de una política pública que considere a la población indígena de la ciudad como grupo especialmente vulnerable.

Sobre la metodología

El estudio “Identificación de las condiciones de vida de la Población Indígena residente en Ciudad Juárez”, se realizó con una metodología mixta. La aproximación cualitativa hubo de realizarse en un solo periodo de trabajo de campo (2013- 2014) durante el cual se reunió la mayor cantidad posible de información directa sobre las condiciones de vida de la población indígena residente en Ciudad Juárez, Chihuahua. El contexto cuantitativo es producto del trabajo de gabinete que revisó las bases de datos de los Polígonos de Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, además de la información del INEGI incluyéndose solamente los AGEBS que forman parte de las colonias con presencia indígena. Se diseñó, piloteó y levantó la encuesta “Condiciones socioeconómicas de la población indígena en Ciudad Juárez” con un total de 349 encuestas a domicilio, previamente seleccionados por el método de tómbola, sorteando los domicilios registrados con población indígenas en las ocho colonias detectadas en una primer visita por parte del equipo de trabajo.

La muestra de la encuesta fue de 350 de las cuales se realizaron 349, con una confiabilidad del 95 por ciento y con un rango de error de ± 3 . Los encuestados fueron mujeres y hombres mayores de 16 años y con preferencia a que se tratara de los padres de familia. La encuesta al ser domiciliar arrojó información de 1,352 personas ubicadas en esos domicilios. Una vez que se contó con todas las encuestas en papel se procedió a capturarlas en la base de Estadísticas Profesionales para Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés). La aproximación cualitativa se enriqueció con la realización de ocho grupos focales, para los cuales se diseñó un cuestionario semi-estructurado de 10 preguntas. Con población tarahumara, mazahua y mixteca se desarrollaron dos grupos focales con cada uno de ellos, siendo de las comunidades más pobladas y representativas en la ciudad. Adicional-

mente desarrollamos uno con estudiantes indígenas cursando educación media y superior y uno más con líderes de diferentes grupos étnicos. Los grupos focales fueron transcritos y utilizados para la validación de mucha de la información surgida de las encuestas, así como para la redacción del diagnóstico y este texto.

Referencias

Ampudia Rueda, Lourdes. “Empleo y estructura económica en el contexto de la crisis en Ciudad Juárez: Las amenazas de la pobreza y la violencia” en Laurencio Barraza (coord.) Diagnóstico sobre la Realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres-SEGOB, México, 2009.

Berteley, María. “Educación indígena del siglo XX en México” en Pablo Latapí. *Un siglo de Educación en México*. FCE, Tomo II, México, 1998b.

Cervera Gómez, Luis Ernesto. *Diagnóstico geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad*, El Colegio de la Frontera Norte-INMUJERES, México, 2005.

Durin, Severin. “¿Una educación intercultural para la ciudad? El Departamento de Educación Indígena de Nuevo León” en Frontera Norte, vol. 19, n. 38, jul-dic 2007.

Graduño, Everardo. Cuatro ciclos de resistencia indígena en la frontera México-Estados Unidos. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Núm. 77, Octubre de 2004.

Herrera, Luis Alfonso, Arturo Herrera y Jesús Gutiérrez Amparán. “Poblaciones migradas en la frontera norte de México: El caso de las comunidades huichol y mazahua en Ciudad Juárez y su incorporación a la Educación Superior como alternativa de vida”, en *Desafíos de la migración ¿Cómo acercarnos a las personas migradas? Miradas de y desde la intervención e investigación e inter-*

vinción social, Ediciones Universidad de Santo Tomás, Santiago, Chile, 2012. http://77fs.planeacion.sep.gob.mx/estadística_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013.pdf, consultado en mayo del 2014.

Jussidman, Clara y Hugo Almada Mireles. La realidad social de Ciudad Juárez. UACJ, México, 2005.

Massey Douglas, Jorge Durand y Nolan J. Malone. *Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos*. UAZ-M.A., Porrúa, México, 2009.

Sariego, Juan Luis. *El indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones interétnicas y desarrollo en la sierra de Chihuahua*. INI-INAH, México, 2002.

Sariego, Juan Luis. La cruzada indigenista en la Tarahumara. *Alteridades*, Vol. 12, Núm. 24, Julio-diciembre de 2002, pp. 129-141

Borja Sebastiá, Jordi. *Revolución urbana y derechos ciudadanos*. Alianza, Barcelona, 2014.